

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
APELACIÓN – AUTO-SENTENCIA

DEMANDANTE	NORALBA AGUDELO TREJOS
DEMANDADOS	COLPENSIONES- PROTECCION
RADICADO	05001-31-05-016-2020-00183-02
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Revoca parcialmente y confirma

Medellín, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a resolver recurso de apelación de auto y sentencia dentro del presente proceso, promovido por la señora **NORALBA AGUDELO TREJOS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **AFP PROTECCION S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 038**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la AFP PROTECCION S.A., contra el auto y la sentencia que profirió el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 26 de junio de 2023; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la demandante, se afilió al régimen de prima media con prestación definida al Instituto de los Seguros Sociales en el año 1982, y que posteriormente, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., en el año 1994, entidad en donde permanece actualmente.

Se duele que el asesor ejecutivo del RAIS no le brindó la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante al momento de ser atendida para afiliarse al RAIS, por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su afiliación a dicha administradora.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por las administradoras del régimen privado demandada, y que en consecuencia, se ordene a la AFP demandada, trasladar a COLPENSIONES las sumas cotizadas por la actora, debiendo ordenar a esta última entidad, recibir dichas sumas, aceptar a la demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral, y condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

Pretensiones subsidiarias: Que en el evento en que se estime que COLPENSIONES no está obligada a recibir o aceptar el traslado de la demandante; se CONDENE a PROTECCION S.A, a la indemnización de perjuicios materiales, al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el momento en que la demandante cumpla la edad pensionable, es decir, aplicando la ley 797 de 2003 pero en lo que tiene que ver al régimen de prima media con prestación definida (R.P.M.D.)

Tanto de manera principal como subsidiaria se solicitó : Que en cualquier evento, se condene a PROTECCION S. A.; a perjuicios materiales consistentes en el valor de los aportes que realizó mes por mes en el fondo privado de pensiones y los gastos en que tuvo que incurrir para generar el traslado de regreso a Colpensiones como gastos de honorarios y transportes y en calidad de

indemnización de perjuicios morales se condene a la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y su respectiva indexación.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas a descorrer el traslado de esta acción.

COLPENSIONES, a través de la contestación allegada (PDF 08 del expediente digital), se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción, y; propuso las excepciones perentorias que denominó: *“ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS QUE IMPIDEN EL RETORNO DE LA DEMANDANTE AL RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, IMPROCEDENCIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL CUANDO QUIEN DEMANDA SE ENCUENTRA PENSIONADO, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN Y/O CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS”*

La entidad también llamó en garantía a la AFP PROTECCIÓN, solicitud que fue negada por el A quo en auto del 07 de diciembre de 2021, (PDF 11). Luego de surtirse el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de Colpensiones, este Despacho, revocó la decisión y ordenó al juez de primera instancia, realizar el estudio formal de la admisión o no del llamamiento en garantía y en auto del 18 de noviembre de 2022, el cual finalmente fue rechazado por el A quo, al omitirse cumplir con el requerimiento impuesto (PDF 23)

PROTECCION S.A., la entidad contestó la demanda, (PDF 22), se opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE RESTITUCIÓN MUTUA EN FAVOR DE LA AFP: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL SEGURO PREVISIONAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y PORQUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE, FALTA DEL JURAMENTO ESTIMATORIO DE PERJUICIOS COMO REQUISITO PROCESAL”*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA – APELACION DE AUTO

Mediante audiencia pública celebrada el 26 de junio de 2023, el JUEZ DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, resolvió no reconocer facultades de representación legal a la apoderada judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., Dra. Natally Sierra Valencia, y dada la inasistencia del

representante legal de la referida AFP a la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, y decreto de pruebas del art. 77 del CPTSS, le fue impuesta la sanción procesal consistente en tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión, esto es, no haberle brindado una correcta asesoría pensional a la demandante durante el traslado entre regímenes pensionales.

De ahí que, al concluir que no asistió a la diligencia el representante legal de la AFP en comento, aplicó las consecuencias procesales por su falta de comparecencia a la audiencia obligatoria de conciliación del artículo 77 CPLSS, consistente en tener por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

RECURSO DE APELACIÓN

En contra de la anterior decisión, la apoderada judicial de **PROTECCIÓN S.A.** presentó apelación tras considerar que, de parte de su representada se anexó escritura pública que cuenta con las características de un *poder general* que debería ser admitido en aras de no afectar los intereses de esta pasiva.

No obstante, el *A quo* se abstuvo de dar trámite a la alzada propuesta, por cuanto no puede suplantarse la voluntad de la entidad, y en este caso, al decirse en el documento que el poder es especial, no resultare viable tenerlo como un poder general. En ese sentido, consideró que la decisión atacada no es susceptible de ser recurrida en apelación conforme el artículo 65 CPLSS.

Frente a dicha determinación, la mandataria de la accionada en comento formuló el recurso de reposición y en subsidio el de queja, arguyendo que, si bien la AFP otorgó poder a través de una escritura pública, fue por un error de digitación que se tituló como poder especial, pero aquella cumple con las características de un poder general en atención a su contenido, trámite inscrito debidamente en el certificado de existencia y representación judicial, posición que incluso ha sido avalada por la Sala Laboral del Tribunal de Medellín.

Mediante auto del 19 de julio de 2023, esta Sala de Decisión consideró mal denegado el recurso de apelación, para seguido admitir la alzada propuesta en contra de la providencia descrita.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada apelante, manifestó que los presupuestos procesales de que tratan los Artículo 53,54 y 74 del Código General del Proceso, esto es, la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso, se materializan en la aptitud para ejercer actos procesales con efectos jurídicos plenos, teniendo la facultad de transferir y dotar a los apoderados judiciales de las personas jurídicas de plena representación. Preciso también que el numeral segundo le da facultad expresamente para asumir la representación en los actos propios del Artículo 77 del CPTSS (Asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, confesar, recibir, comprometer, conciliar, transigir), no teniendo razón, el juzgado de primera instancia, en negar facultades otorgadas mediante escritura pública y debidamente publicitada en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la AFP, no bastando, con la solemnidad de conferir poder mediante escritura pública, Protección S.A, acude al registro mercantil materializando en la Inscripción: 2022/09/16 Libro: 5 Nro.: 195 de la Cámara de Comercio de Medellín dicho acto, quedando con plena eficacia el ejercicio de las facultades allí consagradas.

PROBLEMA (S) A RESOLVER

El problema jurídico a resolver gravita en establecer, en primera medida, si a través de la Escritura Pública No. 606 del 09 de junio de 2022, podía colegirse que **PROTECCIÓN S.A.** concedió a su apoderado facultades de representación legal en el presente proceso, o le asiste razón al Juez de primer grado, procediendo la imposición de las consecuencias legales en contra de la citada entidad.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo reglado en el numeral 2º del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que *“rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros”* es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para dirimir el presente asunto, para lo cual, se seguirán los lineamientos trazados por el artículo 66A del CPTSS, es decir, ciñéndose a lo que es motivo de la impugnación.

Se controvierte en el presente proceso si con base en el documento traído por **PROTECCIÓN S.A.**, puede considerarse que esta, además de conceder la facultad de representación judicial a su mandataria, también la revestía de la posibilidad de actuar con efectos de representación legal, de cara a la audiencia

obligatoria de conciliación reglada en el artículo 77 CPLSS, condición que fue rechazada por el Juez de primer grado.

Para el efecto como se dijo, luego de ser notificada, la citada AFP aportó copia de la Escritura Pública No. **606 del 09 de junio de 2022**, en la cual, para lo que interesa al presente proceso, estipuló:

República de Colombia

VMR
ESCRITURA NÚMERO: SEISCIENTOS SEIS (606)
FECHA: JUNIO NUEVE (09) DE 2022.
ACTO: PODER ESPECIAL.
OTORGADA POR: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
OTORGA A: NATALLY SIERRA VALENCIA.
NOTARIA CATORCE DE MEDELLÍN

(...)

SEGUNDO: Que en el carácter indicado y con fundamento en las facultades estatutarias correspondientes, confiere poder especial a la doctora **NATALLY SIERRA VALENCIA**, mayor de edad, domiciliada en Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.152.441.386 y Tarjeta Profesional No 258007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en su calidad de **APODERADA JUDICIAL** de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, realice las siguientes funciones:

A. Representar a la Compañía en las acciones judiciales o administrativas que ella deba adelantar o que se adelanten en su contra. En desarrollo de esta facultad podrá:

- 1) Notificarse de todas las providencias judiciales o administrativas.
2. Presentar y contestar demandas en las que actúe como parte **PROTECCIÓN S.A.**, asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, confesar, recibir, comprometer, conciliar y transigir.

B. Representar a **PROTECCIÓN S.A.** en los trámites de concordatos y/o liquidaciones obligatorias. Conciliar en procesos concordatarios, liquidatorios, de reestructuración y similares, en que se requiera de la intervención de un representante de **PROTECCIÓN S.A.** para conciliar.

C. Representar a **PROTECCIÓN S.A.** en los trámites de cualquier naturaleza que se deban adelantar ante entidades públicas y privadas.

D. Igualmente representar a **PROTECCIÓN S.A.** en las gestiones que deba adelantar ante las entidades públicas y privadas tendiente a obtener el pago de las acreencias.

E. Suscribir y aprobar en nombre de **PROTECCIÓN S.A.** acuerdos de pago con deudores.

F. Las demás actuaciones que se requiera, de manera que **PROTECCIÓN S.A.** se encuentre siempre debidamente representado en los asuntos de que trata el presente poder.

Tal como se muestran las circunstancias que son materia de debate, debe recordar la Corporación que, en lo concerniente a aspectos como la **capacidad para ser parte** y la **representación**, los artículos 53 y 54 del CGP, aplicables a los contenciosos de índole laboral por virtud de la remisión contemplada en el artículo 145 CPLSS, rezan:

“(…) ARTÍCULO 53. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Podrán ser parte en un proceso:

1. Las personas naturales y jurídicas.
2. Los patrimonios autónomos.
3. El concebido, para la defensa de sus derechos.
4. Los demás que determine la ley.”

ARTÍCULO 54. COMPARECENCIA AL PROCESO. *Las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos con sujeción a las normas sustanciales.*

Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del hijo, o cuando hubiere varios guardadores de un mismo pupilo en desacuerdo, el juez designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio.

Las personas jurídicas y los patrimonios autónomos comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos. En el caso de los patrimonios autónomos constituidos a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuará como su vocera.

Cuando la persona jurídica demandada tenga varios representantes o apoderados distintos de aquellos, podrá citarse a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente. Las personas jurídicas también podrán comparecer a través de representantes legales para asuntos judiciales o apoderados generales debidamente inscritos. (...). (Subraya y Negrilla de la Sala).

En concordancia con ello, en lo referente a la concesión de las distintas modalidades de poderes, el artículo 74 CGP, consagra que: “(...) **Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado.** En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. (...)”.

Así entonces, al contrastar la regulación normativa relativa a la comparecencia al proceso y la forma como deben concederse los poderes de representación, con el fundamento que llevó al Juzgador a desechar la facultad de representación legal pregonada con base en la citada escritura por la abogada que auspicia los intereses de **PROTECCIÓN S.A.**, encuentra la Sala que, en efecto, el fallador incurrió en un excesivo formalismo, por cuanto, además de desconocer que las personas jurídicas pueden comparecer a actuaciones judiciales constituyendo para ello **apoderados generales**, en el particular, igualmente pasó por alto tanto el contenido como la intención de la entidad, quien, de acuerdo a lo precisado en el documento público extendido por esta, establece claramente su interés de ser **representada tanto judicial como legalmente** por la abogada NATALLY SIERRA VALENCIA, portadora de la T.P. No. 258.007 del C.S. de la J., determinando los límites específicos del mandato conferido, como son:

“(…) A. Representar a la Compañía en las acciones judiciales o administrativas que deba adelantar o que se adelanten en su contra. En desarrollo de esa facultad podrá:

1) Notificarse de todas las providencias judiciales o administrativas.

2) Presentar y contestar demandas en las que actúe como parte PROTECCIÓN S.A., asistir a audiencias, absolver interrogatorios de parte, confesar, recibir, comprometer, conciliar y transigir

(…)

*F. Las demás actuaciones que se requieran, de manera que **PROTECCIÓN S.A.** se encuentre siempre debidamente representado en los asuntos de que trata el presente poder (…)” (Negrillas de la Sala)*

Las características anotadas, y el hecho de haber acudido a otorgar el poder mediante escritura pública, más allá de que en su momento lo hubiere nominado como *poder especial*, daban lugar a concluir que, en efecto se trataba de la constitución de un apoderado general con facultad de representación legal en causas judiciales como la ventilada. En estas circunstancias, no está de más recordar que, por virtud de lo establecido en el artículo 228 CN, **hay una prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades**, premisa que tiene desarrollo legal, por ejemplo, en el artículo 11° CGP, el cual contempla como regla hermenéutica para el Juez, la de interpretar las normas de carácter procesal teniendo *“(…) que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…)”*.

Lo anterior en armonía con lo establecido en el artículo 48 CPLSS que exige del Juez asumir *“(…) la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. (…)”*.

Y es que, una idea contraria a lo indicado en precedencia, implicaría del funcionario caer en un desproporcionado ritualismo formal, calificado por la jurisprudencia constitucional como un *“exceso ritual manifiesto”*, por ejemplo, en la Sentencia T-268 de 2010, en la que se dijo: *“(…) En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial (…)”*.

Son los anteriores argumentos suficientes para colegir que a través de la Escritura Pública No. 606 del 09 de junio de 2022, la sociedad **PROTECCIÓN S.A.** otorgó a la abogada NATALLY SIERRA VALENCIA, facultades de representación legal, razón por la cual se REVOCARÁ la providencia que negó

dicha condición, e igualmente, eximir a la AFP en comento de las consecuencias procesales contenidas en el Art. 77 CPLSS, aplicadas por el Juez de primer grado. Sin costas, por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

REVOCAR el Auto del 26 de junio de 2023, proferido por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, a través del cual negó las facultades de presentación legal otorgadas por la AFP **PROTECCIÓN** a través de la Escritura Pública No. 606 del 09 de junio de 2022 a la abogada NATALLY SIERRA VALENCIA, y, en consecuencia, se exonera a la citada entidad de las consecuencias procesales contenidas en el artículo 77 CPLSS. Sin costas.

VI- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA – APELACION DE SENTENCIA

En audiencia pública celebrada el 26 de junio de 2023, el Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando ineficaz el traslado de régimen pensional efectuado por la señora NORALBA AGUDELO TREJOS, del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en consecuencia, declaró que la actora ha permanecido afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado por COLPENSIONES.

Le impuso a las **AFP PROTECCION**, la obligación de trasladar a COLPENSIONES, además de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual de la demandante. El porcentaje correspondiente a los gastos de administración, comisiones y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, **debidamente indexados** y con cargo a sus propios recursos desde la fecha de traslado al RAIS.

A la par, se ordenó a todas la AFP demandada, que, al momento de cumplir la orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Para el cumplimiento de esta obligación

se concedió un término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Por su parte, ordenó a **COLPENSIONES**, a reactivar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida a la señora NORALBA AGUDELO TREJOS y recibir todos los dineros que sean trasladados por PROTECCIÓN S.A.

Se autorizó a COLPENSIONES a **realizar un cálculo de equivalencia** de los dineros recibidos desde el régimen de ahorro individual, consistente en actualizar aplicando corrección monetaria a las cotizaciones completas, que se recaudaron desde el momento que se declara la ineficacia hasta la fecha efectiva de pago. Indicó que el cálculo de equivalencia se realiza en cumplimiento de las sentencias C789 de 2002 y la SU 62 de 2010 entre otras. **(numeral tercero)**

Condenó en costas procesales a la AFP PROTECCION y se abstuvo de imponer condena a cargo de COLPENSIONES.

El A quo para declarar la ineficacia, desarrolló toda la tesis jurisprudencial que en la actualidad sostiene la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, sobre la inversión de la carga de la prueba, la insuficiencia del formulario para acreditar asesoría, la relevancia de la oportunidad en que se reciba la asesoría, la imposibilidad de que la ineficacia se sanee por prescripción o por traslados en el mismo régimen de ahorro individual con solidaridad, por el derecho a la libre selección de régimen pensional.

De otro lado, negó la pretensión de perjuicios invocada por la parte demandante, argumentando que la Corte los ha concedido, cuando no se accede a la ineficacia, por la diferencia que podría presentar la pensión en u otro régimen, pero dado que en este caso se accede a la ineficacia, no está llamada a prosperar dicha petición.

VII. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La apoderada judicial de la AFP PROTECCION, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia, en lo que respecta a la ineficacia del traslado que efectuó la demandante en el año 1999.

Dijo que difiere de la decisión adoptada por el A quo, pues en el interrogatorio de parte, la actora manifestó que recibió una asesoría, que era

consiente que se estaba traslado de régimen pensional, que se le mencionó características propias del RAIS, como la heredabilidad y los aportes voluntarios, y prueba de ello es que la actora realizó aportes voluntarios y además confesó que se le informó que la pensión se construye con el capital que logre ahorrar en el tiempo de afiliación, y frente a otras características manifestó no recordar, hecho que es muy diferente a que no se le hubiese brindado una asesoría.

Sostuvo que la AFP le brindó reasesoria a la demandante, la cual da cuenta de la buena fe de Protección, pues en ella se le previno a la afiliada que tenía un plazo para regresar a Colpensiones y que, de acuerdo a los cálculos realizados, le era más conviene retornar a Colpensiones, sin embargo, la demandante no desplegó las acciones para trasladarse al RPM.

En lo que se refiere al cálculo de equivalencia indicó que, no es una consecuencia prevista por la CSJ, frente a la declaratoria de ineficacia, y que, en todo caso, la AFP generó unos rendimientos los cuales son diferentes en uno y otro régimen pensional.

Alegatos de Conclusión:

El apoderado judicial de **COLPENSIONES**, pidió que se ordene a la AFP demanda, retornar a la entidad, todos los conceptos debidamente indexados, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida.

Acotó igualmente que, la buena gestión y administración de recursos de la AFP no la exime de la devolución de la totalidad de recursos que haya recibido en virtud de la afiliación declarada ineficaz, por lo que la AFP debe devolver a Colpensiones todas las sumas recibidas por causa de la afiliación sin que pueda retener valores por ningún concepto.

Por su parte, la apoderada judicial de la AFP PROTECCION, expresó que la sentencia condenatoria debe ser revocada, por cuando, su fundamento fue la inasistencia del representante legal, dando por confesos los hechos de la demanda, fundamento que no tiene asidero jurídico.

En lo concerniente al numeral tercero señaló que, difiere de la decisión que autoriza a Colpensiones a realizar un cálculo de equivalencia de los dineros recibidos desde el Régimen de Ahorro Individual, debido a que se desconoce que

la cuenta de ahorro individual de la demandante, produjo rendimientos por más de \$55.525.488 y no se puede desconocer en ese sentido que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras y por eso, el fruto o mejora que obtuvo la parte demandante son los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, producto de la buena gestión de la AFP, rendimientos que en Colpensiones no hubiesen siquiera rentado o ascendido a la suma referenciada, y en este sentido, el total de los aportes más los rendimientos que se trasladen de la cuenta de ahorro individual, abarcarían todo concepto que permitiere a la actora acceder a una prestación de vejez, sin que sea necesario acudir al llamado cálculo de equivalencia que menciona el fallo.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VIII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. - La Ineficacia en el traslado de régimen pensional. -

El objeto central de esta Litis, se extiende al punto objeto de inconformismo planteado por el apoderado judicial de la AFP PROTECCION S.A. en su recurso de apelación; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de la afiliación de la actora al régimen de ahorro individual con solidaridad y la aceptación de la demandante en el régimen de prima media con prestación definida que administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala en establecer si la afiliación que hizo la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP demandada, alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y la afiliación o traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como

presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de afiliación o traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en la afiliación o traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en la afiliación o traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar que, conforme a la prueba documental obrante en el expediente digital, se constata que la demandante, inicialmente se afilió al ISS, administrado hoy por COLPENSIONES, en el año 1982, (expediente administrativo), posteriormente, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP PROTECCION en el año 1999 (PDF 22 folio 53) entidad en donde permanece actualmente.

Hora de la consulta : 9:33:25 AM

Afiliado: CC 39167583 NORALBA AGUDELO TREJOS [Ver detalle](#)

Afiliado presenta vinculaciones eliminadas

Vinculaciones para : CC 39167583

Tipo de vinculación	Fecha de solicitud	Fecha de proceso	AFP destino	AFP origen	AFP origen antes de reconstrucción	Fecha inicio de efectividad	Fecha fin de efectividad
Traslado regimen	1999-08-05	2004/04/16	PROTECCION COLPENSIONES			1999-10-01	

Un item encontrado.

1

Vinculaciones migradas de Mareigua para: CC 39167583

Fecha de novedad	Fecha de proceso	Código de novedad	Descripción	AFP	AFP involucrada
1000.08.05	1000.08.12	01	AFILIACION	PROTECCION	

De entrada, este colegiado precisa que, si bien el A quo ante la inasistencia del representante legal de la AFP demandada a la audiencia inicial, le impuso sanción a la entidad, de tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión esto es, no haberle brindado una correcta asesoría pensional a la demandante durante el traslado entre regímenes pensionales; lo cierto es que no fue este el único aspecto que fue tenido en cuenta para arribar a la decisión de declaratoria de ineficacia, expresando el A quo que aunque se acoja o no la sanción atribuida al fondo de pensiones, los elementos probatorios valorados en el proceso como: el formulario de afiliación, la reasesoria y el interrogatorio de parte absuelto por la demandante; son demostrativos de que la demandada no dio información

completa clara y suficiente a la demandante para realizar el traslado al RAIS, atendido a lo dispuesto por la CSJ.

Para zanjar esta controversia, partirá esta sala en verificar, los medios de prueba que obran en el expediente, excluyendo de suyo, la sanción impuesta por el A quo a la AFP demandada, de las consecuencias procesales contenidas en el Art. 77 CPLSS, con base en lo previamente decidido.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia de la afiliación pensional de la actora al régimen de ahorro individual con solidaridad, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que la AFP convocada a juicio (PROTECCION) no alcanzó a probar haberle brindado asesoría a la actora con suficiencia en su proceso de afiliación, en el momento en que la atendieron.

Como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple firma del formulario por parte del asegurado no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que le implicaban ingresar a un nuevo régimen pensional distinto al de prima media con prestación definida al que ya había pertenecido, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

Es importante destacar que el derecho a la libre elección de régimen pensional contenido en la Ley 100 de 1993 en el marco del derecho a la seguridad social no riñe con las disposiciones legales que contemplan la exigencia del formulario, debiéndose entender que, más allá de la documentación formal, existe un sustrato material directamente relacionado con los derechos fundamentales que exige que el asegurado tenga una completa asesoría en su proceso de afiliación o traslado de régimen pensional, la cual coloca a la respectiva administradora en el pleno del cumplimiento de sus obligaciones profesionales en ese sentido, bajo la dinámica del *“buen consejo”*.

Ahora, la Ley 100 de 1993 como norma especial que regula la situación, comprende las exigencias y condiciones de validez de las afiliaciones a las administradoras del régimen privado.

Por lo demás, es preciso indicar que las obligaciones de asesoría y acompañamiento siempre han existido desde que se crearon los dos regímenes pensionales en la Ley 100 de 1993, sin que pueda decirse que se estén haciendo retroactivas obligaciones que solo se hayan impuesto en recientes normas jurídicas.

Como elemento probatorio se anexó el formulario de afiliación suscrito por la demandante en el año 1999, para el momento en que se trasladó del RPM al RAIS, el cual no corresponde a un registro o constancia de que la entidad hubiese dado información, por el contrario, contiene datos que la afiliada le suministró a la demandada. En el formato de afiliación aparece información general de la demandante, de su vinculación laboral, salario y beneficiarios. (PDF 22 folio 45)

Pues bien, para este colegiado, el formulario de afiliación no se erige en la prueba irrefutable de que haya existido asesoría, el mismo solo viene a ser un documento que demuestra la afiliación, pero no es indicativo de que se haya brindado asesoría idónea. Ahora, el artículo 244 del Código General del Proceso, establece la autenticidad de los documentos y cuando debe presumirse el mismo, sin embargo, nótese cómo en este caso no se ha cuestionado la autenticidad del mismo, pues el citado documento tampoco fue tachado, ni objetado por la parte demandante; sin embargo, la discusión jurídica aquí se dio en términos de ineficacia, por falta de asesoría, más que en términos de validez del formulario. En efecto, no se trata de desconocer el valor probatorio que el referido documento pueda tener, el cual es incontrastable en el marco de lo que representa, empero el documento no es indicativo de que haya existido asesoría, buen consejo y acompañamiento.

Por otra parte, la apoderada apelante expuso que la demandante al absolver el interrogatorio de parte, confesó que, para el momento del traslado de régimen pensional, tenía pleno conocimiento sobre las características propias del RAIS.

Al respecto esta colegiatura precisa que valorada la prueba individual y en conjunto, se concluye que la prueba documental, no contienen datos relevantes que conduzcan a dar por satisfecho el deber de suministrar información idónea, necesaria y transparente, es decir, de dar a conocer al afiliado las características,

ventajas y desventajas de estar en el régimen público o privado de pensiones, situación que se convalida con la declaración de la parte actora al absolver el interrogatorio de parte, quien señaló que la información que se le dio gravitó específicamente en relación al RAIS.

El otro aspecto que es objeto de disenso por la apelante, es el concerniente a que la AFP PROTECCION, otorgó a la demandante una reasesoría, mediante la cual se le explicó que era más conveniente trasladarse al RPM, sin embargo, la actora quiso permanecer el RAIS.

En lo concerniente, este colegiado constata que, en efecto, la demandante recibió reasesoría por parte de la AFP demandada, el día 05 de mayo del año 2000 y se deja expresa constancia que, de acuerdo al resultado de la proyección realizada a la afiliada, no le era conviene quedarse en el RAIS sino en el RPM. Véase la casilla de resultado del cálculo:

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION

REASESORIA PENSIONAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

CIUDAD: CAJALIA DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA FECHA DE REASESORIA: 05/05/2000

DATOS DEL CUENTE:

PRIMER APELLIDO: AGUDELO SEGUNDO APELLIDO: TRAVEZ PRIMER NOMBRE: NORALBA SEGUNDO NOMBRE:

CC: 39.167.583 EDAD MUJERES: MAS DE 46 AÑOS (ULTIMOS 10 AÑOS) EDAD HOMBRERES: MAS DE 51 AÑOS (ULTIMOS 10 AÑOS) AÑOS EN EL RAI: MAS DE 5 AÑOS EN EL RAI

SIN HISTORIA LABORAL: SALARIO A JUNIO 2002: MAYOR O IGUAL A \$65.000 TIENE BONO EMITIDO: SI AÑOS DE SERVICIO COTIZADOS A: MAYOR O IGUAL A 15 AÑOS

MOTIVO POR EL CUE SOLICITA LA REASESORIA:

RECIBO CARTA / COMUNICACION: INQUIETUD PROPIA INVITACION DE EJECUTIVO OTRO: CUAL?:

RESULTADO DEL CALCULO:

DESPUES DE REALIZAR EL CALCULO, ECONOMICAMENTE LE CONVIENE QUEDARSE EN PROTECCION S.A.? SI NO

LA DECISION DEL AFILIADO ES:

SE TRASLADA AL ISS: SE QUEDA EN PROTECCION: GESTION EFECTIVA SIN FIRMA DEL CLIENTE:

PARA USO INTERNO DE PROTECCION:

OBSERVACIONES: RESPONSABILIDAD DE LA AFILIADA CONTACTADOS PARA INFORMARLOS DE LA FORMA DE DECISION.

ACTUALIZACION DE DATOS: SI NO INFORMACION PENSION VOLUNTARIA: SI NO

DIRECCION: CAJALIA 129 SUR 43 AP 2001 TELEFONO: 2528593 E-MAIL: noralba.agudeb@fiko.com.co

DATOS DEL EJECUTIVO / CONSULTOR / EMPLEADO PROTECCION:

NOMBRE: MARGARITA TEJERA VARGAS Cedula: 4862101

OFICINA: 2100 REGIONAL: ANTIOQUIA CARGO: EJECUTIVA

DECLARO QUE HE RECIBIDO INFORMACION Y CALCULOS DE MI PENSION Y QUE LA INFORMACION RECIBIDA ES CLARA.

Firma: Noralba Agudeb

Cedula: 39.167.583

Al respecto, se destaca la sentencia 68838 de mayo de 2019, de la Corte Suprema de Justicia en la cual se expuso que “Brindar el servicio de reasesoría al afiliado no sana el incumplimiento de la administradora de pensiones de su deber de información” (...) De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias SL 31989 del 9 de septiembre de 2008, SL 31314 de septiembre 2008 y SL 33083 de 2011, así como en las proferidas a la fecha SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL4989-2018 y SL1452- 2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional

y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado”.

Con base en lo dispuesto, el acto de reasesoría no valida o mejor, no enerva las irregularidades del traslado inicial, pues no puede haber validación a esos actos contrarios a la ley por el mero acto final de darse la mentada información en la etapa de reasesoría.

A lo anterior se agrega que de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia SL 4680-2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia, en los procesos de ineficacia del traslado, *“la inversión de la carga de la prueba en estos eventos opera en favor de los afiliados, al comparar que, dentro de la relación, los mismos se constituyen en la parte débil del vínculo contractual.”* (negrilla fuera de texto)

En consideración a lo expuesto, para este Colegiado, la ineficacia en la afiliación al RAIS de la demandante, se configura, a raíz de la afiliación ausente de información por parte de la AFP demandada, quien tampoco acreditó en los términos que determina el artículo 167 del C.G.P, haberle brindado a la actora un acompañamiento suficiente en su proceso de afiliación.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado de la señora **NORALBA AGUDELO TREJOS**, dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional de la demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de afiliación a la AFP demandada, esto es, se encuentra válidamente afiliada al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele a la demandante, aspecto que, a su vez, es objeto de cuestionamiento por el apoderado judicial de la AFP PROTECCION, en su recurso de alzada.

Desde luego, los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que la actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de PROTECCION, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCION, sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliada la actora.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

En lo que atañe al desacuerdo de la apoderada judicial de la AFP PROTECCION, relativo a que en la sentencia se ordena a COLPENSIONES a **realizar un cálculo de equivalencia** de los dineros recibidos desde el régimen de ahorro individual, dicha medida se REVOCARÁ, como quiera que, esto no es un efecto jurídico de la declaratoria judicial de la ineficacia del traslado, y si bien se requiere actualizar los conceptos a retornar, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, más concretamente el régimen de prima media que administra COLPENSIONES, la solución acogida por la jurisprudencia del órgano de cierre para conjurar esta problemática ha sido la **indexación de los conceptos** antes aludidos y la devolución de los dineros que hacen parte de la cuenta de ahorro individual del afiliado junto con sus rendimientos financieros.

En consideración de lo anterior, se **REVOCARÁ** parcialmente el **numeral tercero** de la parte resolutive de la sentencia, en relación con el **cálculo de equivalencia** de los aportes a cargo de COLPENSIONES.

Singularmente se precisa que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al determinar que las implicaciones prácticas de la ineficacia conllevan a que: *“la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios*

recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJ SL1688-2019). (CSJ SL4062-2021). (subraya y negrilla a propósito)

Finalmente debe señalarse que, es de tal relevancia el principio de sostenibilidad financiera y la importancia de que el mismo no se vea limitado por omitir ordenar retornar todos los descuentos que le hicieron a la cotización, que esta sala advierte que la orden dada por el A quo **resulta suficiente**, como quiera que en el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia, se ordenó el traslado de los conceptos antes señalados.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales a cargo de la **AFP PROTECCION S.A**, teniendo en cuenta la desventura de su recurso de alzada, y en favor de la demandante **NORALBA AGUDELO TREJOS**, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el **numeral tercero** de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, en relación con el **cálculo de equivalencia** de los aportes a cargo de COLPENSIONES, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada y consultada.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a la **AFP PROTECCION S.A**. Agencias en derecho: Un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023, en favor de la señora **NORALBA AGUDELO TREJOS**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA